

LAS REDES DE INTERCAMBIO SOCIAL UNA OPCIÓN FRENTE AL IMPACTO DESMOVILIZADOR

María Cristina Romero S.

RESUMEN

En las décadas anteriores, las acciones de hombres y mujeres en su lucha por satisfacer necesidades sociales debían enmarcarse en una estructura fija y estereotipada, los sindicatos, los gremios, los partidos políticos; hoy en los noventa en donde lo que predomina es la incertidumbre, tales estructuras pierden vigencia, para dar paso a modos espontáneos de organización que en muchos casos nacen reactivamente a aquellas formas instituidas.

ABSTRACT

In the past decades men's and women's actions in their fighting to satisfy social needs had to be framed in a fixed and stereotyped structure, syndicates, associations, public parties, now in the nineties such structures have lost effect opening the way to such spontaneous organization means. Due to achievements obtained by organizations leading popular social movements this phenomenon can be justified in Costa Rica.

1 HACIA UNA NUEVA REALIDAD EMANCIPATORIA

Los estudios relacionados con la temática de los movimientos sociales en el país demuestran que, durante el período que va desde el inicio de los años ochenta hasta la actualidad, la acción orgánica mayoritaria tanto sindical como gremial, no ha desperfilado su papel corporatista, en tanto, sus estrategias se han dirigido a la consecución de beneficios para sus afiliados dentro del marco de pacto social que las había caracterizado históricamente.

Frente a la política gubernamental de cerrar los espacios de negociación laboral, los sindicatos y los gremios dieron una respuesta reivindicativa y de integración sin plantear una oposición firme, ni un proyecto de sociedad alternativo al que se gesta en el ajuste. Por otra parte, tanto el movimiento campesino como el comunal, sufrieron los efectos de políticas desmovilizadoras y desarticuladoras por parte de los gobiernos y sus protestas asumieron características más negociadoras que confrontativas en el marco de la legitimidad tradicional de los mecanismos de resolución de los conflictos estado-sociedad civil.

Un rápido recorrido por, lo que creemos son, las acciones organizadas más destacadas alrededor del problema de la agricultura, de la vivienda y de las reivindicaciones salariales de los empleados públicos, que han ocurrido en el país en el período indicado, y que intentaron no sólo presentar planteos reivindicativos sino también proponer alternativas o como diría Luhman (1995:16) equivalentes funcionales frente a las políticas que se imponían desde el poder nacional e internacional, lo cual tiene la pretensión de servir de ilustración a nuestra posición en relación con el comportamiento de las acciones organizadas, y sus consecuentes resultados, y enmarcar, asimismo, la propuesta que intentamos bosquejar.

Los años 1986 y 87 se caracterizaron por la movilización de organizaciones campesinas para reclamar lo que llamaron el derecho a producir. En ella integraron las demandas por la reducción de los precios de los insumos, el crédito ágil y oportuno, facilidades para la comercialización, la tierra para los campesinos organizados, incluyendo la defensa de la seguridad alimentaria, para contrarrestar la política de importar granos de consumo básico, si éstos se cotizan a un precio menor en el mercado internacional.

En 1988 se mantuvo la coordinación de las organizaciones del sector agropecuario en aras de sus reivindicaciones, sólo que esta vez se amplió la alianza a los grandes productores graneros y a los ganaderos, así como a los pequeños productores de café y cultivos perecedores. Se constituyó la red denominada Unión Nacional del sector agropecuario (UNSA); en 1990 se reanuda la coordinación, o se rediseña la red, alrededor de agrupaciones con cierta autonomía e independencia estatal y política. Las acciones movilizadoras dan lugar a un incremento notable de organizaciones campesinas en la década del ochenta, en la búsqueda de espacios de participación en el marco del ajuste en el agro. Sin embargo, los resultados de la movilización campesina no consiguieron satisfacer completamente las demandas, en parte por las dificultades que, originadas en la dispersión geográfica de las organizaciones y su heterogeneidad social, política y organizativa, debilitaron la posibilidad de consolidación (Cepas:38:1990).

2. EL FRACASO DE LAS ESTRUCTURAS RÍGIDAS Y LAS LUCHAS POR LA SUPERVIVENCIA EN LOS 90

Hoy día, gran parte de los pequeños productores han optado por actividades productivas nuevas lo que, además de provocar el desmantelamiento de la producción de granos básicos, pone en riesgo la seguridad alimentaria.

Otros, involucrados en la denominada Mesa Nacional Campesina, negocian exoneraciones, cambios en el tributo a los activos, en el gravamen territorial y en el marchamo ecológico, con miras a lograr la firma de un decreto que autorice un sistema de compensación para pequeños y medianos productores. (*La Nación* 22 A-24.9.96).

La red de compra, comercialización y reabastecimiento de semillas a los productores creada en noviembre de 1995 alrededor del Consorcio Frijolero integrado por UPANACIONAL, UNACOOOP, CNP y Coope Llano Azul, cuenta con apoyo financiero gubernamental dentro de una política de incentivos a la siembra de granos básicos dado el aumento en los precios internacionales. (*La Nación* 22 A-20-10-96).

Tal parece que el contexto nacional demandó cambios en cuanto a los aspectos organizativos del movimiento campesino en los años en cuestión, dando lugar a formas organizativas más ágiles y menos solidificadas y centralizadas, en este sentido, existe un planteamiento de que este elevado grado de pluralismo y diferenciación —que identifican las acciones organizadas de los últimos años— se debe a que “la organización no define al movimiento, sino que éste es siempre más que las diversas organizaciones que engloba” (Riechmann y Fernández, 1994:48). De esta manera, surgen nuevas formas organizativas producto de reorganizaciones, de reposicionamiento, de acuerdos, de negociaciones en la búsqueda del diseño viable y, por lo tanto, de la oportunidad de la red social.

Alrededor del problema de la vivienda se manifiesta fundamentalmente la reacción en las comunidades ante el deterioro en el nivel de vida durante la década de los 80. Simultáneamente, hay reacciones de protesta por el alza en los costos de los servicios públicos

(electricidad y transporte colectivo) y por la deficiencia en la prestación de los servicios urbanos básicos (agua potable y transporte colectivo, principalmente).

Al agravarse las posibilidades de acceso a una vivienda digna para miles de familias se dan las condiciones políticas para la gestación de un movimiento social de dimensiones nacionales. Se forman comités de vivienda en diferentes lugares del país y muchos de éstos se aglutinan en tres frentes de lucha¹. La reivindicación principal de los frentes era la consecución de financiamiento para la construcción de las viviendas, dado que en ese momento el gobierno empezaba a reconocer su incapacidad para asumir esa tarea (Molina:1990). Además lo que se buscaba también era la agilización de trámites para la consecución de vivienda.

“Desde su creación a inicios de la década del 80 hasta finales de 1985, los frentes de vivienda y otros comités de lucha realizaron frecuentes movilizaciones y otras acciones de presión (ocupaciones violentas de edificios públicos, invasiones de predios urbanos, enfrentamientos con los aparatos policiales) para tratar de lograr que las demandas fueran atendidas” (Valverde:1990:9).

Sin embargo, los resultados no fueron muy satisfactorios durante el Gobierno de Monge, pues ese fue el principal tema de campaña de Oscar Arias (1986-1990). Dada la gravedad del problema, un mes antes de entrar al gobierno (en abril de 1986), el presidente electo Arias Sánchez suscribió un acuerdo con tres de los frentes de vivienda, en el cual se comprometían a colaborar activamente en la solución del problema habitacional, pero también a abandonar la práctica de alentar las tomas de tierra (Molina:1990:46).

Con la firma de ese acuerdo, los frentes de vivienda dejaron de ser organizaciones rei-

vindicativas para convertirse, junto a la empresa privada, en “brazos constructores del Estado”. De ahora en adelante, pasarían a promover y a organizar la solución de la vivienda de los distintos comités afiliados a los frentes. Es así como muchos de los dirigentes pasaron a ser funcionarios del gobierno o, en el mejor de los casos, funcionarios de las empresas constructoras formadas por alguno de los frentes (el caso del COPAN) (Idem:pp.98-101). Esto tampoco devengó los resultados esperados, pues el gobierno de Arias Sánchez no cumple con la promesa de las ochenta mil casas, pues se evidenció que, tan sólo treinta mil se destinaron a personas de bajos y medianos ingresos comparando con el otorgamiento de bonos familiares de los cuales sólo 9643 corresponden a bonos totales, que son los que se entregan a familias con mínima o nula capacidad de pago, por lo que deben aportar lote, trabajo y materiales de construcción (*La República*:15-2-1990:4 A).

A todas luces se desprende que un sector social claramente beneficiado con la política de vivienda de la administración Arias son los empresarios de la construcción, quienes absorbieron gran parte del financiamiento disponible.

Un balance final permite afirmar que los movimientos de lucha por vivienda, al ser cooptados e integrados por el estado, conforman un tipo de organización que ve reducido el margen de las posibilidades de lograr soluciones integrales. Son dependientes de los márgenes de acción y participación que diseña el gobierno, potenciado esto con las alianzas del gobierno con los dirigentes de los frentes que tenían centralizado el poder.

3. LAS REDES SOCIOESPACIALES: FUERZA DE MOVILIZACIÓN EN LA SOCIEDAD POSMODERNA

Por otra parte nos interesa destacar, además, la acción organizada que consideramos como alternativa a las formas tradicionales y de las cuales señalamos, en las páginas anteriores, los ejemplos que consideramos más representativos de las acciones de la ciudadanía que se moviliza para “provocar, impedir o anular un cambio social fundamental” (Reichman y Fernández 1994:50), y nos estamos refiriendo, entre otros a los movimientos espontáneos.

¹ Entre ellos el Frente Democrático de la Vivienda (FDV), el Frente Costarricense de la Vivienda (FCV) y la Coordinadora Nacional de Lucha por una Vivienda Digna COPAN. Posteriormente se formó la Asociación Nacional de Vivienda (ANAVI).

Uno de los principales exponentes de tal alternativa organizada consistió en la lucha contra los aumentos de las tarifas eléctricas en 1983, la cual asumió la forma de un Comité Nacional de Lucha, que como una protesta generalizada, cobró tal magnitud que obligó a la negociación del comité con el Gobierno, logrando no sólo el retroceso de las elevaciones tarifarias a diciembre de 1982, sino también una serie de importantes reivindicaciones. Podemos destacar aquí, con respecto a los resultados de esta acción organizada que la fuerza del movimiento definió las condiciones de la negociación y dicha fuerza se derivó de la incorporación en el mismo de una gran cantidad de población afectada, además de la participación de dirigentes populares de diferentes tendencias políticas.

Al respecto Manuel Rojas (1992:29) plantea...

“Fue una interesante experiencia de cooperación entre diversas tendencias políticas, emanadas por la necesidad de enfrentar una medida que afectaba a todos por igual”.

Por otra parte con respecto al movimiento sindical, el fracaso de la huelga bananera de 1984 marca, según Rojas “el punto más bajo del sindicalismo en los años ochenta” (p. 35) producto del nulo apoyo gubernamental a este tipo de movimientos y aunado a esto el éxito que comienza a tener el movimiento solidarista, dado que sus concepciones y prácticas diluyen el conflicto social de intereses entre patronos y trabajadores lo que contribuye a neutralizar su capacidad de lucha reivindicativa.

La confrontación social en la esfera estatal en la década del 80 tiene como eje dos aspectos: la política salarial y la política de negociación colectiva. El problema se presenta cuando las distintas administraciones gubernamentales ponen en marcha una política laboral que reduce en términos significativos las posibilidades de negociación de las organizaciones sindicales en torno a sus reivindicaciones. Consecuentemente, empieza a articularse una política orientada a lograr la uniformidad y regularización de los salarios de los empleados del sector público para lo cual se emiten diferentes legislaciones y regulaciones por

parte de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo. Las más importantes, de acuerdo con su repercusión generalizada en el sector público, son la Ley de Administración Pública, la creación de la Autoridad Presupuestaria y los decretos salariales de las administraciones Monge Álvarez y Arias Sánchez.

Se prohibió la suscripción de nuevas convenciones colectivas, al aprobarse la Ley de Administración Pública en 1978. La intención original del gobierno de Carazo Odio (1978-1982) era eliminar las convenciones colectivas vigentes. Sin embargo, por la presión sindical después aprobó conceder la prórroga de las convenciones ya firmadas, siempre que se tratara de una actualización y no de una nueva negociación. Empero, se fijaron regulaciones que las sujetaban a la política salarial decretada por el Poder Ejecutivo y les limitaban la posibilidad de incluir beneficios adicionales, que generaran desigualdades entre los trabajadores de los entes descentralizados y de los otros organismos públicos. Además, se estableció un mecanismo de consulta obligatoria con la Procuraduría General de la República, con la Dirección General de Servicio Civil y con la Autoridad Presupuestaria, a fin de verificar el cumplimiento de las directrices².

La aplicación de las restricciones señaladas, al inicio del gobierno de Arias Sánchez, suscitó conflictos con las organizaciones sindicales que tenían suscritas convenciones colectivas³. Como reacción a la movilización de los sindicatos afectados, el Poder Ejecutivo acordó mantener vigentes las convenciones colectivas emitidas previamente a las disposiciones de la Ley de Administración Pública, mientras no se elaborara una nueva legislación que regulara la renegociación de salarios y convenciones colectivas.

2 Administración de Rodrigo Carazo (1978-1982). Libro de actas del Consejo de Gobierno. Tomo II, f. 166-167, sesión ordinaria No. 135, art.V.Cit. por CEPAS. *Panorama Sindical* N° 14, 1988, pp. 2-3.

3 Entre ellas las del Banco Nacional, Banco Popular, de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), del Instituto Nacional de Seguros (INS), la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

El Gobierno de Calderón Fournier (1990-1994) intentó elaborar un proyecto de ley para eliminar las convenciones colectivas y laudos arbitrales del sector público, a lo que los sindicatos por su parte manifestaron su oposición a estas medidas con paros de protesta.

Sin embargo, es la administración de Calderón Fournier la que lleva adelante la ejecución del Plan de Movilidad Laboral lo cual ha contribuido a que los resultados de la lucha sindical en el sector público sean limitados. Sin embargo, podría destacarse que la respuesta defensiva de algunos sindicatos ha logrado preservar por lo menos algunas conquistas logradas antes de 1980. Es el caso de la reacción oportuna de las organizaciones sindicales de instituciones autónomas, en relación al conflicto de las convenciones colectivas, que dio como resultado la mantención de ese derecho con restricciones y pese a la prohibición que inicialmente se decretó, se firmaron convenciones colectivas en el sector público, entre 1984 y 1987.

Los efectos del Plan de Movilidad en las estructuras organizativas sindicales ha sido nefasto en cuanto a su vigencia como instancia protectora y resguardadora de condiciones laborales, en tanto acusó un duro golpe a la capacidad de presión y negociación por la merma de afiliación debido a la movilidad y por la visión cortoplacista de sus acciones que demostraron su incapacidad de ofrecer una oposición firme a las políticas gubernamentales. Pero también la respuesta débil tiene que ver con relaciones de clientelismo que desde la década del 50 ha ligado a una buena parte de las organizaciones sindicales con el gobierno, a través del partido Liberación Nacional, así como con la atomización organizativa y la imposibilidad de lograr acuerdos estratégicos neutralizadores de las diferencias ideológicas que caracterizan el sindicalismo del sector público. En un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica del año 1993, Valverde y otros, analizan el impacto de la movilidad laboral en la actividad organizativa sindical y manifiestan que los trabajadores ven que

“los sindicatos han dejado de ser un actor social con proyección institucional y vocación de poder. Se le percibe como

un medio asociativo en crisis, capaz de resolver pequeños, aunque importantes problemas laborales internos, pero incapaz de redefinir el rumbo institucional futuro” (Valverde y otros, 1994:15)

El movimiento cooperativo costarricense no permaneció ajeno a la influencia de las políticas estatales implementadas para enfrentar la crisis, lo cual explica la reorientación que se produce, a partir del año 1981, en sus fines y en el papel que deben jugar en el desarrollo social (Romero, 1994).

Las cooperativas agrícolas han estado históricamente en el país, en la mayoría de los casos, ubicadas en la producción de granos básicos (arroz, maíz, frijoles), con altos costos, constantes riesgos y bajos rendimientos económicos. Esto por cuanto, la calidad de la tierra no era la más adecuada para realizar esos tipos de explotación; los problemas de comercialización no se resolvieron permaneciendo siempre el pequeño productor en dependencia del intermediario; asimismo se integraba a los campesinos a un tipo de organización que en la mayoría de los casos reñía con su práctica anterior relacionada con el proceso productivo que él llevaba a cabo, además de los requerimientos propios de una organización de este tipo, en cuanto a los aspectos administrativos, contables, etc., frente a los cuales los asociados se encontraban incapacitados de resolver (Mora, 1987).

Las cooperativas que pudieron desarrollarse más satisfactoriamente fueron las dedicadas a la explotación de actividades económicas de mayor rentabilidad como el café, banana, ganado, caña de azúcar o cultivos tradicionales con altos precios y garantía para sus productos (Cazanga, 1982).

El planteamiento de Fals Borda (1976:23) para el cooperativismo latinoamericano se aplica también en Costa Rica, en la medida en que aparece más bien como una modalidad organizativa en la que los gobiernos se apoyaron para buscar una salida a la problemática del agro.

De manera tal que los efectos de la crisis, no sólo golpea al cooperativismo agrícola sino al conjunto del movimiento, dando lugar a un estancamiento en su desarrollo.

En general se destaca que, problemas tales como la escasez de capital de trabajo,

escaso dominio de las técnicas de comercialización nacional e internacional, escaso conocimiento de las técnicas modernas de producción, la poca capacitación para planificar la producción (Jiménez:1990) son los que dejan a las organizaciones cooperativas sin armas para enfrentar la crisis en que se sumieron.

Los programas de ajuste estructural que han repercutido directamente en los pequeños y medianos productores nacionales han afectado por igual a los que se encuentran agrupados en las diferentes cooperativas. Asimismo la eliminación de preferencias como subsidios u otro tipo de exenciones asestó un duro golpe a las economías de las cooperativas.

Otros factores derivados de la situación de crisis del país y que han afectado al cooperativismo tienen que ver con la disminución de las fuentes de crédito para la operación e inversión, la eliminación de los créditos subsidiados y la apertura de la producción hacia terceros mercados que afecta sobre todo a las cooperativas agroindustriales por la mayor competencia que se genera. Ante esto la cúpula del movimiento cooperativo declara que se debe asumir una concepción empresarial de la cooperativa para afirmar su capacidad competitiva dentro del marco de una economía orientada eminentemente hacia el mercado y se definió crear condiciones para que la cooperativa actúe, en el ámbito de la sociedad costarricense, como cualquier otra empresa económica.

Se observa que desde los dirigentes se promueven ideas que propugnan que el cooperativismo se encamine hacia un papel diferente en cuanto a alcanzar una eficiencia que le permita a las cooperativas competir con las empresas privadas (Romero: 1996).

La estrategia establecida para tal efecto propone el mejoramiento de la capacidad productiva y la eficiencia administrativa vía de aplicación de los paquetes tecnológicos más adecuados para asegurar rentabilidad; asimismo el apoyo financiero se daría aplicando criterios relacionados con

“la bondad del proyecto y la capacidad empresarial, principalmente en los proyectos de actividades productivas no tradicionales de exportación y consumo nacional” (PLANDECOOP: s. f. p 43).

4. BALANCE: CRISIS, CAMBIOS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

Con la mirada puesta en el comportamiento de la acción organizada alrededor de la defensa de las condiciones de vida por parte de las principales organizaciones, con lo que se ha pretendido ilustrar los acontecimientos que han tenido mayor relevancia con relación al movimiento social frente al modelo de desarrollo que se instaura posterior a la crisis económica del país, que sin embargo, no agotan el análisis de una temática que no es el punto central de este trabajo.

En síntesis se puede plantear que la crisis económica agudizada a principios de 1980 en Costa Rica tiene un importante significado, por cuanto desencadena un proceso de cambios en la economía, en las condiciones sociales y políticas de la sociedad, que la distinguen claramente de las características del período histórico anterior (década del 50 fines de la década del 70). En éste imperó un modelo de desarrollo en el que la agroexportación de productos tradicionales, la sustitución de importaciones y la configuración de un estado intervencionista y benefactor fueron los rasgos principales.

Frente a la crisis económica, los gobiernos formulan inicialmente políticas de estabilización, sostenidas financieramente por la abundante ayuda económica recibida del gobierno de Estados Unidos. Posteriormente, formulan las políticas de ajuste estructural, con las cuales se consolidan las estrategias económicas impulsadas para América Latina por parte de los organismos financieros internacionales.

Estas nuevas políticas implican cambios en las actividades productivas y en el papel del estado en la sociedad. Es así como se plantean como principales ejes de la política económica el incentivo a las exportaciones no tradicionales y la disminución de la intervención estatal en la economía y en lo social, para darle una mayor importancia a la iniciativa privada. Como resultado de este proceso, a fines de los años ochenta se observó un repunte económico a nivel global, según se expresó en los datos oficiales referentes a indicadores como el PIB y la inflación. A nivel de la situación social también hubo un mejoramiento importante, en comparación con el deterioro

manifestado en el período más agudo de la crisis económica (1980-1982). No obstante, las valoraciones oficiales de la situación social resultan dudosas, al considerar las desigualdades regionales, en el impulso de las políticas de ajuste estructural. Sin embargo, presentan algunas diferencias con respecto a la aplicación del ajuste. Mientras los sectores agroexportadores y los sectores industrial y financiero vinculados al capital transnacional apoyan una línea más ortodoxa de ajuste de la economía, con una intervención mínima del Estado en el carácter de regulador; los grupos de productores agrícolas para el mercado interno abogan por una estrategia de desarrollo que no elimine el papel interventor del Estado en la economía. Son precisamente estos últimos sectores los que en determinadas coyunturas se han aliado con los medianos y pequeños productores, en defensa de la llamada soberanía alimentaria y de una aplicación gradual del ajuste económico.

5. LA ACCIÓN SOCIAL CON REDES Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONTEXTOS ALTERNATIVOS

La revisión realizada demuestra que la complejidad y en consecuencia la morfología que adopta la sociedad hoy excluye a un importante sector de su población, lo que da como resultado procesos de desafiliación, de apatía, de individualismo, en este contexto hemos podido reconocer cómo a los largo de estos años van cobrando vigencia las redes sociales tejidas desde la constante interacción debida a la cotidianidad como la posibilidad de construir nuevas alternativas de participación desde el mundo de la subjetividad que se activan en una coyuntura favorable para la movilización. Por eso es que planteamos que el concepto de redes sociales en su doble significación conceptual nos muestra, por un lado, a la red social como la materia prima del entramado social que constituyen las agrupaciones humanas que comparten espacios, ideas y valores; y, por otro lado, como una posibilidad de reconstituir el tejido social hacia la calidad de vida. Por lo tanto, desde la ciencia social, urge diseñar estrategias de intervención aptas para activar las redes latentes

para consolidar la deteriorada identidad colectiva y, así enfrentar la vulnerabilidad social y crear espacios novedosos y reagrupamientos en la acción comunitaria que trasciendan las estructuras rígidas e inoperantes.

El trabajo en redes puede diseñarse desde una perspectiva investigativa así como también para cumplir con un propósito de realizar una práctica social.

Investigar en redes nos permite ir descubriendo el tejido en donde palpita lo social.

Intervenir en redes es actuar en las redes preexistentes para lograr la optimización de las mismas, promover nuevas redes en proyectos comunitarios de solidaridad y apoyo y proponer secuencias de abordaje concretas ante problemáticas graves y de urgente atención, todo esto en la dinámica propia de la vida cotidiana.

Las nuevas corrientes epistemológicas demandan ajustes y reorientaciones de las estrategias de intervención para aumentar los resultados de la participación de los integrantes de las organizaciones.

¿Con base en qué fundamentos podemos construir un trabajo que plantee alternativas de participación? Debemos posicionarnos en una perspectiva epistemológica que implica asumir una noción de realidad como algo que construimos, con base en nuestros sentidos, en nuestra ideología, en nuestra particular manera de ver el mundo que nos rodea y en el cual tratamos de encajar.

Una noción de sujeto constructor de sentido, constructor de realidades y no un estorbo a la objetividad. Una concepción en donde las crisis no sean interpretadas como desorden y caos, sino más bien como momentos de replanteamiento de decisiones y búsqueda de salidas más constructivas.

Una concepción del lenguaje en la que éste deja de ser el mero reflejo de la realidad para pasar a considerar su potencialidad como constructor de sentidos, como creador de contextos y de realidades.

Hoy la ilusión de un contexto estable e independiente se desmorona, la incertidumbre que esto crea en la cotidianidad de nuestra sociedad, aunado a los procesos globalizantes que comprometen no sólo las macro estructuras sino también las prácticas de la cotidianidad, son retos a los cuales se les debe hacer

frente desde la ciencia social fortalecida teórica y metodológicamente.

La concepción de que el ser vivo en su dinámica estructural es un sistema de autoproducción de sí mismo sobre la base del recambio con el medio que como dice Maturana (1994) lo vivo de un ser vivo está determinado por él, no fuera de él, nos lleva a reconsiderar el concepto de la objetividad no sólo en la ciencia sino también en la práctica social en tanto, que lo observado es una construcción del observador. El conocimiento es siempre autorreferencial.

Con los aportes de la biología del conocimiento nos damos cuenta que ya no es posible plantear la relación sujeto-objeto como fuente de conocimiento, relación que es descrita como un sujeto que se acerca al mundo objetivo al cual conoce y representa mediante el lenguaje. De esta manera se plantea que el conocimiento no se recibe previamente ni por la vía de los sentidos, ni por la vía de la comunicación, sino que el ser humano construye el conocimiento a partir de su búsqueda de viabilidad para lograr el encaje en el medio, o sea, su viabilidad en el ecosistema en el cual está inmerso.

CONSIDERACIONES FINALES

Al romperse la relación benefactora del estado con la sociedad, se crean las condiciones para que se gesten procesos sociales en aquellos grupos que ven incrementada su exclusión, lo que puede fortalecer formas organizativas preexistentes y promover alternativas autogestionarias novedosas.

Así, al conquistar espacios de identidad propia, la vida cotidiana se redimensiona pues de ser objetos de intervención las personas asumen la posición de sujetos en la acción.

Las luchas por salud, vivienda, agua, luz y servicios urbanos, en fin las acciones en la búsqueda de la calidad de vida, al consolidar una red de movimientos de barrios adquieren un protagonismo generador de nuevas formas de auto ayuda y de educación política que trascienda el cortoplacismo y sustituya las acciones micro que se realizan en ámbitos locales, temporalmente coyunturales a las necesidades e intereses, para reconocer y diseñar la pauta que conecta a la red local con redes de mayor co-

bertura, conectar los actores sociales en el marco del propósito de reconstruir la sociedad civil.

Uno de los elementos básicos para lograr lo anterior es una mayor apertura al diseño flexible y al cambio de planes en el curso de las acciones, la rigidez riñe con la propuesta de replanteamientos.

Pensar en red para facilitar las ligazones reconstructivas del tejido social requiere un pensamiento acerca de la complejidad.

El paradigma de la simplicidad de la linealidad es útil y explica contextos estandarizados, estables y en equilibrio en cambio en sistemas complejos, la diferencia, el otro, el conflicto, el acontecimiento no programado son los que posibilitan el crecimiento y la evolución.

Creemos que las redes sociales son el ámbito por excelencia de la interacción humana, porque el sujeto adviene como tal en la trama relacional de la sociedad, sin embargo, no necesariamente existe una conciencia de los actores involucrados en red, pues ciertos agrupamientos alrededor de temas de interés o necesidades sentidas, son generalmente vividos como estrategias de sobrevivencia y no como una organización en red.

En los años 90 nos hallamos en un momento histórico en donde la incertidumbre predomina en el accionar y el pensamiento humanos.

No se pueden ofrecer recetas para el trabajo en red, ni para el trabajo con grupos sociales, lo que importa es que más que una receta, es necesario una actitud frente a la realidad social, una conciencia social, una fortaleza teórica, epistemológica y metódica, con lo cual es posible trabajar con diferentes niveles de intervención comunal, institucional u otros, desde una perspectiva transdisciplinaria. Sin embargo, podemos recomendar ciertos lineamientos para orientar el diseño de un trabajo de apoyo, asesoría, promoción social, entre ellos destacaremos, los siguientes:

Tratar de incrementar las relaciones entre diversos subsistemas de una institución u organización, generar espacios conversacionales que permitan identificar las principales áreas problemáticas y la construcción de soluciones.

Tratar de articular cada red institucional, pública o privada con otras que desarrollan acciones similares lo que tiende a potencializar las acciones conjuntas mejorando la

calidad y pertinencia del proyecto que llevan a cabo.

Tratar de favorecer las conexiones intersectoriales para romper los esquemas propuestos desde las instituciones y que tienden a cooptar la acción organizada de los ciudadanos.

Tratar de conectar cada grupo local con otros de nivel nacional o internacional. No sólo una propuesta de este tipo fortalece el movimiento sino que se convierte en un ámbito de comunicación y aprendizaje puesto que trasciende la visión localista del fenómeno.

Tratar de promover el aprendizaje permanente mediante la gestión, y evaluación de cada proyecto que se desarrolle. El fortalecer la participación de los ciudadanos en estos momentos de la acción organizada, no sólo clarifica la conciencia sobre los acontecimientos, sino que permite una mayor autonomía con respecto a los agentes externos sean o no institucionales y consolida la identidad colectiva.

En lo teórico el pensar en red nos mueve a reflexionar sobre los conceptos de organización que se manejan, en lo metodológico nos obliga a revisar los lineamientos en la formulación de proyectos privilegiando lo que se refiere a los diseños contingenciales por sobre la rigidez de planes de acción.

En síntesis, vivimos formando parte de redes y construyendo otras, la idea es hacer conciencia de nuestra participación en determinadas redes, romper esquemas rígidos pensar en las diferencias, en los múltiples intereses que nos mueven, en las contradicciones, en la negociación buscar los consensos mínimos para llegar a los máximos, crear espacios conversacionales enriquecedores y no disolutivos para que justamente se establezcan esos consensos, construir la identidad de red.

En lo político, la red trasciende fronteras dogmáticas y doctrinariamente rígidas para llegar a conformar un tejido organizativo en que las especificidades no se pierden ni se diluyen, sino que encajan en un conjunto que se potencializa justamente por la dinámica de la diversidad a favor de un proyecto de sociedad incluyente y no excluyente.

Trascender las formas organizativas que tienden a la cooptación más que a la construcción de alternativas de calidad de vida.

BIBLIOGRAFÍA

CONACOOOP *Plan de Desarrollo Cooperativo*. (PLANDECOOP), San José, s.f.

Cazanga José "Las cooperativas de caficultores de Costa Rica en el proceso del capitalismo en el café", *Tesis de Maestría* en Sociología, UCR, 1982.

CEPAS. *Balance de la situación*, San José, nº 36 junio-agosto 1990; 38 Nov-Dic 1990.

——— *El movimiento sindical: un dilema entre lo nuevo y lo viejo*, San José, 1988.

Dabas Elina y Denise Najmanovich (Compiladoras). *Redes: el lenguaje de los vínculos*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995.

Escuela de Trabajo Social. *Diagnóstico de Trabajo Social en Costa Rica*, ALAETS-CELATS-UCR-ETS, San José. 1990.

Jiménez Guerra, Mireya. "Situación del movimiento cooperativo en Costa Rica 1985-1989", Versión preliminar, San José, INFOCOOP, Departamento de Planificación, 1990.

Luhman Niklas. *Poder*. Editorial Anthropos, 1995.

Maturana Humberto. *La realidad: ¿Objetiva o construída?* Anthropos, España, 1995.

——— y Francisco Varela. *El árbol del conocimiento*. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1994.

Molina Alfaro, Eugenia. "Repercusiones político-organizativas del acuerdo político firmado entre los frentes de vivienda y el Estado durante la administración Arias Sánchez". Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, *tesis de Maestría* en Sociología de la Universidad de Costa Rica, 1990.

Mora Jorge. *Cooperativismo y Desarrollo Agrario*, San José, Costa Rica, EUNED, 1987.

Mora Minor, Ma. Eugenia Trejos, José Manuel Valverde, "Compensación o control social

- en el ajuste", *Revista Reflexiones*, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, San José, C.R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1992.
- "Movilidad laboral y organización sindical en Costa Rica". *Revista Impacto Social*, N° 1, 1994, IIS, UCR.
- Nuñez Vega Benjamin. "Las propuestas de UPANACIONAL, Alternativa o inserción en el ajuste estructural", *Revista Ciencias Sociales*. 63:89-100, marzo 1994, UCR.
- Riechmann Jorge y Francisco Fernández. *Redes que dan libertad*, Ediciones Paidós Ibérica S.A.Barcelona, 1994.
- Rivera Rolando e Isabel Román. "Protesta campesina en la Costa Rica de los ochenta". San José: CEPAS ponencia presentada al VII Congreso Centroamericano de Sociología, realizado en Guatemala, del 10 al 15 de octubre de 1988, p. 16.
- Rojas, José Manuel. "Movimientos sociales en Costa Rica 1980-1988 ". *Cuadernos de investigación*. San José: CSUCA, No. 53, enero de 1990, p. 9.
- Rojas Manuel. "Los años ochenta y el futuro incierto", *Fascículo 20*, EUNED, 1992.
- Romero Saint Bonnet, Ma. Cristina. "La praxis de la educación cooperativa y sus condicionantes contextuales (1981-1991)". *Tesis de Maestría* en Sociología, UCR.
- "La educación cooperativa, dirigentes y asociados opinan al respecto", *Revista Horizontes* N° 9, San José, 1996.
- Trejos Ma. Eugenia y José Manuel Valverde. *Las organizaciones del magisterio frente al ajuste*, FLACSO n° 80, 1995.
- Valverde José Manuel y otros. "Cronología: movimientos populares y política social en Costa Rica:1980-1988", IIS, FCS, UCR, *Serie Documentos 7*, 1991.

Ma. Cristina Romero S.
Escuela de Trabajo Social
Universidad de Costa Rica